

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintidós de mayo de dos mil diecinueve.

Por agregada la siguiente documentación:

a) Informe suscrito por el licenciado Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir, instructor de este Tribunal, de fecha veintiocho de enero del corriente año, mediante el incorpora prueba documental (fs. 29 al 169);

b) Informe suscrito por el Secretario Municipal de la Alcaldía de Torola, departamento de Morazán, presentado el día siete de febrero del presente año, con documentación adjunta (fs. 170 al 175).

El presente procedimiento administrativo sancionador se tramita contra el señor Héctor Ventura Rodríguez, ex Alcalde Municipal de Torola, departamento de Morazán, a quien se atribuye la posible transgresión a la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra h) de la Ley de Ética Gubernamental –en lo sucesivo LEG–, relativa a: “*Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley*”, por cuanto el día tres de enero de dos mil catorce habría participado en el acuerdo del Concejo Municipal de Torola, departamento de Morazán, nombrando a su hermana, señora Rosa Elizabeth Ventura Rodríguez, como Jefa de la Unidad de la Mujer y Jefa de la UACI ad-honorem.

Adicionalmente, porque el señor Ventura Rodríguez habría intervenido en el acuerdo de dicho Concejo Municipal del día veintitrés de abril de dos mil quince, mediante el cual dicha señora fue nombrada como Gerente de Inversión Social, y en los acuerdos de fechas cuatro de mayo de dos mil quince y cinco de enero de dos mil dieciséis, por medio de los cuales se refrendó el nombramiento de dicha señora como Jefa de la UACI ad-honorem de esa institución (f. 18).

Al respecto, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

I. De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 762, publicado en el Diario Oficial N° 209, Tomo 417 de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, a partir del día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y hasta el día trece de febrero del presente año, se encontraban vigentes las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración Pública (DTPARAP), en virtud de las cuales “El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución final en el plazo máximo de **noventa días** posteriores a su iniciación, haya sido esta de oficio o a petición del interesado...” (artículo 5 inciso 2°).

Adicionalmente, el artículo 7 letra b) de las DTPARAP refiere que vencido el plazo máximo para dictar resolución expresa en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se producirá caducidad. La caducidad no producirá por sí

sola la prescripción de las acciones, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de la prescripción.

La caducidad se define como “una forma de terminación anticipada del procedimiento a causa de su paralización” (Marcos Gómez Puente, *La Inactividad de la Administración*, pág. 550).

En otros términos, “la caducidad o perención es una figura jurídica que, con fundamento en los principios administrativos de eficacia, eficiencia, celeridad e impulso procesal tiene como fundamento la inactividad o dilación en la tramitación de un procedimiento (Javier Rodríguez Ten, *Deporte y Derecho Administrativo Sancionador*, p. 237).

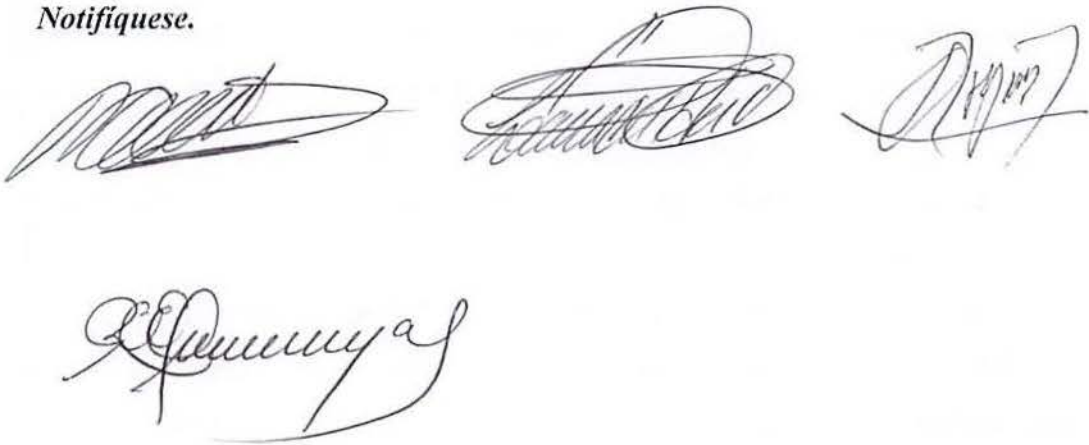
Así, el legislador estableció como consecuencia jurídica ante la superación del plazo máximo dispuesto para que la Administración Pública concluya el procedimiento, la caducidad del mismo por ministerio de ley.

En el caso particular, se advierte que la resolución de apertura del procedimiento fue notificada al investigado el día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (f. 19), por lo que al haberse superado el plazo máximo para emitir la resolución final, corresponde declarar la caducidad del procedimiento.

Por tanto, y con base a lo establecido en las disposiciones legales citadas, este Tribunal **RESUELVE:**

Declárase la caducidad del presente procedimiento administrativo sancionador; en consecuencia, archívense las diligencias.

Notifíquese.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN

